

Las autonomías asumirán el 75% de los recortes de empleados públicos

LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ De los 13.000 millones de euros que deben ahorrarse en gastos de personal hasta 2014, 8.500 pertenecen a las comunidades, según el informe de Moncloa.

Y.G. Madrid

La rebelión de las comunidades autónomas, incluso las del PP, contra la reforma de la Administración Pública anunciada por el Gobierno no ha hecho más que empezar. Sobre todo si se lee la letra pequeña de las propuestas elaboradas por los expertos del Ejecutivo, que indica que, de los 12.966 millones de euros que todo el Estado deberá recortar en gastos de personal hasta 2014, un total de 8.542 millones correrá a cuenta de las autonomías. Es decir, el 75%.

Esta cantidad se reparte entre los años 2012, 2013 y 2014, y es fruto de las medidas que adoptó el Gobierno en materia de empleo público durante el pasado ejercicio. Entre otras, la de establecer en cero la tasa de reposición para la administración pública; la reducción de los días por asuntos propios (conocidos como moscosos) o el incremento de la jornada laboral a 37 horas y 30 minutos semanales, entre otras.

Así, el ahorro del año pasado fue de 40 millones de euros para la Administración central; de 323 para los entes locales (ayuntamientos, dipu-



Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado sábado en una reunión del PP en Madrid.

taciones y cabildos) y de 1.105 para las comunidades autónomas. Todo ello suma 1.468 millones, según el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora).

En el presente ejercicio, de un ahorro total previsto de 5.023 millones, 728 millones

de euros correrán a cuenta del Estado; 976 millones a los ayuntamientos y 3.238 millones a las autonomías. Y para el próximo año, el informe de la Cora prevé que el ajuste sea de 6.556 millones, que se distribuirá así: 1.057 millones de la administración central; 4.199 de las comunidades y

1.300 millones de los entes locales.

En conjunto, esto significa que las autonomías deberán ahorrar 8.542 millones, lo que supone dos tercios del total; que el Estado dejará de gastarse 1.825 millones de euros, y los entes locales, 2.599 millones.

Rebelión contra los ajustes

- El PSOE pedirá la próxima semana al Congreso que fuerce la retirada de la reforma, a la que calificó ayer como "contrarreforma".

- Foro Asturias rechazó ayer que el Gobierno "endose sacrificios a los demás" cuando, de sus 453 entes públicos, "el Estado central solo ha eliminado 19 en un año".

- IU cree que suprimir el Consejo de la Juventud de España es una "venganza del PP contra los jóvenes que se movilizan".

Cuando el Gobierno anunció su reforma, varias autoridades autonómicas se lanzaron en tromba a rechazarla. Así, por ejemplo, Cataluña afirmó que "no va a devolver jamás ninguna competencia" y Andalucía dejó claro que sus organismos "seguirán con-

CiU pedirá eliminar más de 100 entes del Estado central

Expansión. Madrid

CiU responderá a la reforma de las administraciones impulsada por el Gobierno presentando en el Congreso de los Diputados un listado de más de un centenar de organismos estatales, entre ellos el ministerio de Sanidad, que puede desaparecer por duplicar funciones. También cita Cultura, actualmente integrada dentro del Ministerio de Educación.

El vicesecretario general de Unió, Antoni Font, avanzó ayer las propuestas que su líder y portavoz de CiU en el Congreso, José Antonio Duran i Lleida, llevará a la Cámara Baja para frenar a un Gobierno que "claudica al pensamiento de Aznar y de la Faes". Cataluña es una de las comunidades autónomas enfadadas por la reforma que el Gobierno ha presentado para ganar eficacia y en la que recomienda a las autonomías acabar con duplicidades en diferentes organismos.

"La contrarreforma presentada por el Gobierno no tiene nada que ver ni con los políticos ni con el sacrificio que nos requiere. Tiene más que ver con la involución autonómica, con el desguace del espíritu constitucional de la Transición", aseguró el vicesecretario.

El FMI recomienda volver al túnel



LA ESQUINA

Miguel Valverde
mvalverde@expansion.com
@MiguelValverde4

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha comprometido con la Comisión Europea a hacer un balance sobre la reforma laboral antes de que termine julio. El día 8 del mes que viene se cumple un año de la publicación de la ley, después de la tramitación parlamentaria del Real Decreto de febrero de 2012. El ministerio sopesa que sea la OCDE, "como organismo independiente y de prestigio", el que haga el informe sobre la modificación del mercado de trabajo.

La verdad es que en tiempos de austeridad como los que vivimos no hace falta que el Ministerio invierta tiempo y recursos en la elaboración del informe. Ya lo ha hecho la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. "El verdadero potencial de la reforma laboral [en forma de creación de empleo] está por llegar, y eso sucederá cuando haya crecimiento económico y cuando el crédito llegue a las empresas, pues hay que tener en cuenta que [el cambio le-

gislativo] se ha puesto en marcha en una recesión". En definitiva, la profunda reestructuración laboral no ha funcionado hasta ahora para crear empleo porque España está atravesando una depresión económica y, una de sus consecuencias, es que las empresas no disponen de financiación.

Es verdad que el Ejecutivo suele defender la decisión con la idea de que ha facilitado muchos acuerdos en las empresas para defender el empleo a cambio de la congelación o reducción salarial; para separarse de los convenios sectoriales que no puedan cumplir. Sin embargo, también es verdad que multitud de empresas han aprovechado la rebaja del despido para reducir plantillas de una vez por todas. En su defensa de la política restrictiva de la concesión de créditos, el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, explica que muchos empresarios le dicen que no necesitan préstamos porque les sobra capacidad instalada. Han ajustado la

La depresión del consumo puede acentuarse si el Gobierno tiene la tentación de seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional

plantilla y ahora no tienen la demanda suficiente para volver a contratar. Es la competitividad que, en opinión del Gobierno y de la patronal CEOE, ha ganado la economía española y también la clave de que, pese a ello, no crezca el empleo industrial. Salvo que cambien las cosas, España mantiene y gana mercado exterior, pero no genera empleo por esta vía.

En todo caso, las empresas no tienen demanda privada suficiente porque, entre otras cosas, millones de familias ni pueden ni se atreven a consumir más allá de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas. El panorama de los hogares españoles es que el desempleo afecta al 27% de la población activa -6,2 millones de personas- y, como uno de los daños colaterales de esta situación, 1,9 millones de familias tienen en el paro a todos sus miembros en edad y condiciones de trabajar. Como reflejo de todo ello también, los salarios llevan tres años perdiendo poder adquisitivo. Desde que comenzó la crisis han perdido en torno al 6% respecto a la inflación. Incluso, no debe pasar desapercibida la caída de la natalidad. El número de nacimientos se ha reducido un 12,8%.

No obstante, la situación podría empeorar más si el Gobierno tiene la tentación de seguir

las recetas del Fondo Monetario Internacional de seguir abaratando el despido y fomentando la reducción de los salarios. Sobre todo, si transcurridos unos meses, el FMI reconoce que con España también se ha equivocado, como acaba de hacerlo con el impacto de sus recetas de austeridad en Grecia, al subestimar su alcance. Claro que el daño ya estaba hecho. Y encima, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, anima a fomentar los planes de pensiones, privados o públicos, para complementar la prestación de la Seguridad Social. A lo mejor, Linde piensa que las familias prefieren los planes de ahorro a poder comer, pagar la hipoteca, la letra del coche o los colegios de los chicos.

Por todas estas razones, lo más prudente que puede hacer el Gobierno es esperar a ver si se cumplen los pronósticos -incluido el suyo- de que la economía empezará a crecer en la última parte del año. Será entonces el momento de comprobar si la reforma laboral ha dado mayor elasticidad a la economía y permite empezar a generar empleo neto con crecimientos más modestos, que antes de la crisis se situaban en torno al 2%. Si no es así, la estrategia habrá fracasado y el FMI tendrá razón.